

El Triángulo de la Criminalidad en la Tierra Caliente: Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla, Michoacán, 1995–2025

*The Triangle of Criminality in Tierra Caliente: Apatzingán,
Tepalcatepec and Aguililla, Michoacán, 1995–2025*

Casimiro Leco Tomás¹
Ramiro Hernández Vargas^{2*}
María Fernanda Ramos Martínez³

Recibido: 2 de febrero de 2026 Aprobado: 22 de junio de 2026
DOI: <https://doi.org/10.33110/cimexus210205>

RESUMEN

El presente artículo analiza las transformaciones socioterritoriales y las relaciones de poder que configuraron el denominado Triángulo de la Criminalidad, integrado por los municipios de Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla, en la región de Tierra Caliente, Michoacán, durante el periodo 1995–2025. La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo e interpretativo, sustentado en la revisión de literatura científica, fuentes hemerográficas, estadísticas oficiales y conocimiento empírico generado en la región. El análisis evidencia que este espacio constituye un escenario de gobernanza criminal, donde la interacción entre actores estatales, organizaciones delictivas y sociedad ha propiciado procesos de fragmentación institucional, control territorial y reconfiguración del poder local. Los hallazgos muestran que este triángulo trasciende la condición de zona de violencia para consolidarse como un laboratorio de recomposición sociopolítica, cuya comprensión demanda políticas públicas con enfoque territorial, social y cultural que atiendan las causas estructurales del conflicto.

Palabras clave: Tierra Caliente, crimen organizado, gobernanza criminal, control territorial y violencia estructural.

ABSTRACT

This article examines the socio-territorial transformations and power relations that have shaped the so-called Triangle of Criminality, comprising the municipalities of Apatzingán, Tepalcatepec, and Aguililla in the Tierra Caliente region of Michoacán, Mexico, between 1995 and 2025. The study adopts a qualitative and interpretative approach based on the review of scientific literature, journalistic sources, official statistics, and locally generated empirical knowledge. The findings reveal that this territory constitutes a setting of criminal governance in which the interaction among state institutions, organized crime groups, and local communities has fostered institutional fragmentation, territorial control, and the reconfiguration of local power. The study concludes that this territorial triangle extends beyond being a hotspot of violence, emerging instead as a laboratory of socio-

¹ Profesor-Investigador, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE), Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH). Correo electrónico: casileco@hotmail.com

² Maestrante en Ciencias del Desarrollo Regional del ININEE-UMSNH. Correo electrónico: rhernandezva@outlook.com

³ Doctorante en Ciencias del Desarrollo Regional del ININEE-UMSNH. Correo electrónico: fernanda.ramos.martinez@umich.mx

*Autor de correspondencia: Ramiro Hernández Vargas. rhernandezva@outlook.com

political recomposition whose understanding requires public policies grounded in territorial, social, and cultural approaches capable of addressing the structural causes of the conflict.

Keywords: Tierra Caliente, organized crime, criminal governance, territorial control and structural violence.

INTRODUCCIÓN

La región de estudio pertenece a la Tierra Caliente en Michoacán, México misma que está invadida de una serie de conflictos históricos, disputas locales y gubernamentales debido a causas de ocupación por el espacio territorial, vínculos institucionales y forma de gobernanza. Los hechos delictivos de ninguna manera están desconectados de la realidad actual sobre la inseguridad que se vive en la Tierra Caliente, lo que ha determinado que se trata de una región que resulta altamente propicia para el crimen organizado sobre proyectos de poder histórico, legales e ilegales en donde han encontrado condiciones idóneas a partir de su geografía inhóspita, una larga tradición de revueltas agrarias y fragilidad institucional para prácticas turbias, generando condiciones ideales para el negocio ilícito en las economías políticas arrojadas por la violencia.

El presente artículo explora el cambio social y territorial generado por formas de relaciones de poder que tuvieron lugar en un triángulo en particular —se trata de uno de los tres triángulos criminógenos identificados por el Diagnóstico Institucional— en el cual establecieron diversos tipos de alianzas de poder regiocéntricas dentro de Tierra Caliente a través de Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla ratificándose “El Triángulo de la Criminalidad”. Dicho triángulo no solo se ha convertido en un área estratégica para el despliegue a gran escala del crimen organizado, sino también en un laboratorio sociopolítico donde los límites entre la legalidad y la ilegalidad se difuminan, así como también aquellos que corresponden más tradicionalmente a las instituciones estatales centrales con deberes de seguridad, justicia y vida civil que continúan siendo disputados de forma permanente (Guerra 2017; Leco y Aguirre 2020; Fuentes 2015).

Este artículo busca comprender cómo los factores históricos, sociales y políticos que se han reconfigurado en Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla en un entorno que se ha vuelto propicio para la criminalidad se hayan consolidado. Por otra parte, se analiza la manera en que las alianzas entre la sociedad, gobierno y el crimen organizado han incidido de forma directa en la transformación del poder local como una medida de control político-territorial, teniendo implicaciones en la vida cotidiana de los pobladores, La justicia social y soberanía en la región calentana.

Para la comprensión del objeto de estudio, se utilizó una metodología de carácter cualitativo sustentado en el análisis de fuentes académico-científicas, información documental basada en archivos particulares y locales, notas periodísticas y bases de datos oficiales, así como el trabajo de campo en la región de estudio y el conocimiento empírico que se genera desde adentro de la comunidad el cual se analizó, problematizó y argumentó conforme a ciertas teorías basadas en la producción territorial capitalista (Maldonado, 2010; Guerra, 2022).

Durante las últimas tres décadas (1995-2025) en la región de la Tierra Caliente en Michoacán, ha tenido lugar un conjunto de acontecimientos extremadamente violentos a partir de conflictos armados: cambiantes y contestaciones sociales militares entre agencias estatales, grupos del crimen organizado y nuevas organizaciones comunitarias fuertemente armadas. En este contexto, el caso de Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla es notable no solo por ser puntos estratégicos dentro del

corredor montañoso-occidental de la entidad, ya que han configurado una tríada territorial en la que la gobernanza, el orden social y la violencia han estado permanentemente bajo disputas entre los poderes de facto.

Ante el clímax de la inseguridad en la región ha emergido lo que llamamos "el Triángulo de la Criminalidad" se trata de un laboratorio social en el que se experimentan realidades con relación a las soberanías en conflicto, donde la línea que delimita lo legal e ilegal o formal e informal se borra y desaparece de la nada. Todo comenzó con la conformación de "El Triángulo de la Criminalidad" con la conformación de La Familia Michoacana en Apatzingán durante la década de 1990, se trataba de una estructura criminal que dio origen a los denominados Caballeros Templarios, tal y como lo explica Maldonado Aranda (2010), señalando que se trata de "políticas y violencia en los márgenes del Estado", que se desarrollan entrelazadas con formas autorizadas de ilegalidad.

Para el año 2006, la militarización del gobierno federal estaba basada en la política para implementar una estrategia frontal lo que atrajo cazadores de brujas de exterminio de los integrantes de grupos criminales en diferentes contextos, obligando a cambiar de prácticas ilícitas a "normales", a regular sus negocios del lavado de dinero y controlar el territorio implementándose otras estrategias intimidatorias atentando con vidas humanas inocentes, extorciones, secuestros y cobro de piso, aunado a enormes destinos de embarque de carga y en busca por el control entero de los municipios en México.

En este sentido la Tierra Caliente vivió su mayor levantamiento civil armado durante las últimas dos décadas que se dio en 2013 cuando un grupo de autodefensas comunitarios se levantó en Tepalcatepec y La Ruana, como una contestación inmediata a los abusos del crimen organizado, la ausencia del Estado y de ingobernabilidad. Esta movilización ciudadana no fue una ruptura con el orden criminal, sino una metamorfosis de acuerdo al autor Guerra Manzo (2022), quien señala que muchos de estos grupos evolucionaron hacia organizaciones parapoliciales con vínculos con el narcotráfico y el poder político local.

Estas prácticas de mutación entre actores civiles y armados dieron pauta para que también se mostraran nuevos cárteles como Los Viagras, que jugaban un doble papel por el control territorial y gestión por la violencia en Apatzingán. El periodo 2019-2025 se caracterizó por la ofensiva del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), particularmente en Aguililla y Tepalcatepec con incidentes fehacientes que detonaron en atentados, explosión de drones, asesinatos de agentes estatales y la reestructuración de poderes locales.

Un hecho inusitado se registró el pasado mes de junio de 2025, cuando se presentó el asesinato de la alcaldesa de Tepalcatepec Martha Laura Mendoza M., lo que hizo visible la presencia del crimen organizado que opera con total impunidad sobre las instituciones locales, a pesar de los mecanismos de seguridad del Estado quien ha gastado sus fondos en las últimas décadas tratando de combatir al crimen organizado quedando claro que no ha sido suficiente, parece estar rebasado y se muestra incompetente en no atender la variable inseguridad en Michoacán.

Los municipios que conforman la región de la Tierra Caliente no necesariamente forman parte de un área disputada entre las bandas rivales, más bien se han convertido en un territorio desde la cual opera impunemente el crimen organizado, involucrados mediante un control armado que se

explican también a través de los lazos regulatorios; redes clientelares, relaciones de castigo y gobierno que vinculan a la población con el poder criminal y las instituciones estatales (Vite, 2017; Fuentes, 2015). Por lo anteriormente señalado, la región no puede explicarse únicamente en términos punitivos o militares, sino que debe comprenderse desde una lectura territorial de ella; involucrando los marcos sociales dentro de las cuales han existido una larga historia delictiva, orígenes de los conflictos armados y una cultura sobre la violencia en Michoacán.

El mapa municipal sobre la violencia y control territorial en Michoacán es referenciado por los municipios de Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla para establecer hitos. Localidades, que juntos suman más de 167,000 personas en población y más de 5,500 km² en términos territoriales; los tres se caracterizan por dinámicas económicas específicas—agricultura comercial y ganadería emparejadas con comercio informal, —cada uno de ellos ha encontrado infiltración o intervención a diferentes escales de los grupos de poder, directamente controlados de arriba hacia abajo por redes criminales.

Se trata de una capital regional con características específicas, por un lado, con infraestructura y conectividad como Apatzingán, por otro, municipios como Tepalcatepec o Aguililla que han sido parte de grupos de autodefensa desde 2013. Este triángulo territorial, estratégica en el corredor oeste-sur y por su historia reciente, se configura como un laboratorio político criminal de “gobernabilidad”, legalidad y en donde los actos de violencia se están reestructurando.

Según Guerra Manzo (2022), la Tierra Caliente puede entenderse como un "territorio de violencia" donde la producción del espacio está atravesada por prácticas sistemáticas de coerción, exclusión y despojo tanto material como simbólico. El autor no llama a estos territorios activistas o ingobernados, sino como espacios donde convergen diferentes marcos normativos (de formal, informal y comunitario) en el cual convergen diferentes grupos criminales y que continuamente se enfrentan entre sí para mantener el control político-criminal de los pobladores.

En este mismo sentido, Maldonado Aranda (2010) concibe a estos espacios como los "márgenes del Estado"; áreas donde el orden estatal no ha colapsado, sino que se expresa selectivamente, en cierta medida, subordinado por acuerdos, omisiones o concesiones con actores ilegales poderosos. La ciudadanía no es simplemente un objetivo pasivo de esta configuración, sino que está involucrada en relaciones de negociación, lealtad o resistencia contra estos actores.

La investigación de Vite Pérez (2017) parece mostrar que la vigilancia armada —colectivamente llamada patrullas comunitarias, rondas ilegales o mixtas— no es fácil un signo de la inexistencia del Estado, sino una especie de soberanías locales, a veces más eficientes y quizás más legítimas que las estatales. Dentro de esta ecología de poder distribuido, la sociedad civil emerge tanto como un objetivo, agente de vigilancia; víctima de la violencia y administrador de su propia seguridad.

La complejidad de estas dinámicas se resume en los grupos de autodefensa que surgieron poderosamente en Tepalcatepec y Aguililla desde 2013. Originalmente aclamados como una reacción popular a la ruptura del orden estatal, la mayoría de estas organizaciones se convirtieron en cooptadas, fragmentadas o transformadas en grupos criminales, proporcionando así una gran cantidad de

ejemplos listos para las (limitaciones) de la autoorganización armada en sociedades donde los estados responden con estrategias de securización en lugar de política social (Fuentes-Díaz, 2015).

La línea de demarcación entre autoprotección y mafioso es tan borrosa como lo es el gobierno versus aglomeración – fuerzas decidieron distinguir; desde esta perspectiva, el presente artículo busca analizar las relaciones de poder entre la sociedad, el gobierno y el crimen organizado en el "El Triángulo de la Criminalidad", con énfasis en las transformaciones socioterritoriales producidas por los constantes conflictos que se han prolongado en las últimas tres décadas. Para ello se utilizó una metodología de carácter cualitativo, basada en fuentes documentales; primarias para comenzar con la tarea de reconstruir narrativas institucionales, complementada con el trabajo de campo en la región calentana y sustentadas en las experiencias territoriales de los diferentes actores locales.

Esta línea de interpretación se sitúa dentro del marco de la literatura territorial crítica y la teoría en violencia estructural, permitiéndonos problematizar que el conflicto no solo responde a la lógica del narcotráfico, sino a un modelo alternativo de gobernanza violenta cuando el Estado se retira, delega o desplaza. A través de este análisis, se busca una lectura completa y no reduccionista que evite la fácil reducción entre estrategias de securización mirando a través de circunstancias estructurales (económicas, culturales y políticas) en las que persisten las formas de violencia organizada.

I. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El objetivo principal de esta investigación es poder escrutar mediante un sentido crítico y profundo la intrincada interacción y los vínculos interdependientes entre la sociedad, el gobierno y el crimen organizado en el área geográfica y socialmente densa conocida como "el Triángulo de la Criminalidad" en Tierra Caliente, Michoacán, que abarca los municipios de Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla, durante un período de 30 años (1995 a 2025).

El presente trabajo es de carácter cualitativo e interpretativo, el cual ofrece un marco crítico-analítico que se abre la posibilidad no solo de eventos aislados, sino también de un análisis de la práctica violenta como una forma territorializada anclada históricamente e interceptada relacionamente a través de disputas por el control del poder local, tanto entre instituciones estructuradas dentro de algunos parámetros aceptables de legalidad como aquellas que tienen mayor o menor participación en estructuras extralegales.

La articulación de esta postura metodológica está directamente relacionada con la realidad objetiva, debido a que uno de los autores es originario de la región de estudio, lo que ha permitido adentrarse al campo de acción, conocer la visión desde adentro, facilitar el recorrido en trabajo de campo y realizar entrevistas a profundidad con informantes claves, lo que ha generado una valiosa proximidad territorial y cultural, así como también una sensibilidad particular para que los matices sociales, las dinámicas comunitarias y las representaciones permanezcan visibles entre las otras versiones que tienden a escapar de meras interpretaciones subjetivas, estadísticas o visiones externas. Esta es la cara de una condición doble: en su primer yo, como investigador, y en este caso, también su segundo yo, como miembro de una comunidad históricamente herida por la violencia, el desplazamiento forzado y la fragmentación institucional. Por lo tanto, este trabajo no se restringe al únicamente al contenido académico; también refleja la búsqueda del conocimiento y la descripción

de mecanismos que han formado los comportamientos y un estilo de vida para los ciudadanos nativos que durante décadas han padecido, formando parte de una cultura local.

La metodología utilizada describe numerosas formas de obtener, sistematizar y analizar la información, intercalando fuentes primarias, secundarias y hemerográficas, dentro del modo de trabajo de triangulación como un mecanismo para la validación y el enriquecimiento del conocimiento producido. En su momento, se revisó de forma sistemática una amplia gama de literatura académica nacional e internacional que incluía obras esenciales y muy valoradas como axiomas para comprender la violencia en Michoacán, sin embargo, fue el trabajo de campo que nos dio luz para la comprensión de la problemática en cuestión.

Dentro de las referencias primarias se encuentran trabajos que aluden a la conceptualización de una "violencia territorial" generados por Guerra Manzo (2022), donde se sostiene empíricamente que la Tierra Caliente es un territorio violento, con intervalos de dominación institucional y comandos funcionales frente a lógicas criminales; las contribuciones de Maldonado (2010) relacionadas con la caracterización necesaria para estructuras ilegales o pandillas y espacios territoriales como las fronteras de Lima donde la vida cotidiana integra bases de reglas de agrupamiento criminal; los enfoques de Vite sobre la vigilancia comunitaria como resistencia y actividad osmótica territorial contra el poder criminal dentro de su espacio territorializado (Vite, 2017), lo que destaca a los grupos de autodefensa como parte de modos heterogéneos que almacenan capacidades violentas a través de lógicas de fragmentación selectiva vinculadas a la estrategia de tráfico de drogas, procesos de desplazamientos preventivos combinados bajo aplicaciones limitadas de fuerza coercitiva (Fuentes, 2015).

La construcción metodológica de esta investigación no se reduce únicamente a lo documental. Aunque las preocupaciones de seguridad impidieron realizar largas estancias en el campo de acción, en donde se realizaron entrevistas semiestructuradas en contextos "seguros" mediante alianzas entre investigadores académicos y asistentes de investigación locales, con líderes comunitarios, periodistas locales, funcionarios municipales, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes de los municipios estudiados. Al proporcionar los relatos o testimonios anteriores, obtuvimos una mayor comprensión de cuál era la percepción de la violencia a nivel local, las prácticas y formas de organización social. En este sentido, el trabajo testimonial ha sido importante para tecnificar y diversificar el análisis, lo que nos permite contrastar narrativas oficiales que tiende a resumirse en formas conductivas de el "crimen organizado" inclusive desconectadas de los contextos sociales-históricos-políticos de forma específica.

Respecto al análisis intensivo de fuentes hemerográficas para la investigación. Se revisaron y sistematizaron en más de un centenar de noticias producidas a nivel locales, nacionales e internacionales, derivadas de sitios web como Animal Político (2013; 2014a 1b), cobertura en Proceso 1718 (2009), Changoonga.com (2014) o periódicos como UNO TV/24 horas (2018) y medios que incluyen columnas escritas por corresponsales especializados como Riva Palacio para Eje Central.com Diario. Las mencionadas fuentes fueron esenciales para la reconstrucción de las líneas de tiempo sobre eventos fundamentales, documentando asesinatos de autoridades municipales y diversas manifestaciones, por ejemplo, bloqueos de carreteras, desplazamientos masivos, para captar las alianzas y confrontaciones entre los grupos criminales con estructuras estatales. La realización del trabajo de campo fue donde primero se pudieron obtener las evidencias sobre las realidades existentes

en el espacio público, y esto proporcionó una entrada para el análisis sobre el discurso gubernamental al contrastarlas con narrativas locales.

También se consultaron bases de datos oficiales como estadísticas de homicidios intencionales en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) localizando eventos particulares. El mapeo de los datos cuantitativos sobre los hallazgos cualitativos, para revelar líneas de tiempo de escalada y desescalada y espacios geográficos sobre la violencia crónica, así como el uso de la cartografía nos permitió delimitar el territorio e identificar fronteras.

Para explorar la dimensión territorial del fenómeno, se creó una línea de tiempo que abarca de 1995 a 2025 basada en notas de prensa, informes de derechos humanos, evidencia cívica y documentos oficiales. Esta cronología se combinó con una de las principales herramientas de cartografía crítica para mapear el movimiento de los diferentes actores armados, enclaves de violencia sistemática y territorios bajo control (comunitario o criminal). La herramienta metodológica del mapeo se convirtió en recurso analítico esencial porque demostró que el control territorial no solo se expresa a través de la violencia física sino también a través de la ocupación simbólica y económica de ubicaciones claves, como carreteras, centros comerciales y corredores de producción agrícola.

El análisis se estructuró en torno a tres ejes temáticos. El último estudia las cartografías del poder armado, la disputa territorial y la interacción entre cárteles, grupos de autodefensa y fuerzas gubernamentales, así como los matices de estos actores para construir legitimidad social o imponer miedo (Flanigan, 2014; Guerra, 2022). Transformaciones que implican la existencia de instituciones corruptas, formas paralelas de instituir poder, como escenarios capturados por actores políticos y otros interesados en expandir su influencia a lo largo de líneas no democráticas, corrupción sistémica y cohabitación entre autoridades legales y grupos criminales (Maldonado, 2010; Leco y Aguirre, 2020), formando un gobierno en la sombra dentro del Estado. Un tercer eje tiene que ver con las consecuencias sociales, políticas y subjetivas del conflicto, como el desplazamiento forzado, el colapso de las economías locales, la ruptura de las relaciones comunitarias o cómo la violencia ha sido naturalizada en la sociedad (Fuentes 2015; J. L., 2015).

En términos generales, esta investigación se configura como un ejercicio de lectura crítica del territorio y una combinación del conocimiento empírico y académico con el objeto de documentar los múltiples niveles la violencia en Tierra Caliente, Michoacán. Un trabajo que no se limita al análisis de los hechos cotidianos, sino que busca explicar las lógicas del poder central, alianzas mediante las redes de control y resistencias sociales.

II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

El problema en torno a "El Triángulo de la Criminalidad" en Tierra Caliente, Michoacán, debe entenderse no solo como un fenómeno territorial sino sociocultural y estructural. Geográficamente, la región está compuesta por los municipios de Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla, pero su verdadera complejidad radica en un tejido muy denso de conexiones y tensiones que entrelazan a la sociedad, el gobierno y los actores del crimen organizado que coexisten, negocian o casi se vuelven indistinguibles, ya sea abiertamente o de manera encubierta. Y, según las vivencias etnográficas como oriundo de la región de estudio, es una de las características más sorprendentes y duraderas del conflicto; la violencia y la criminalidad no se presentan en estos territorios solo como fenómenos externos que vinieron de otros lugares, sino que operan a través de estructuras

profundamente articuladas con la vida social, política local y economía (Guerra, 2022; Maldonado, 2010; Leco y Aguirre, 2020).

Desde el punto de vista de este horizonte teórico, el marco contextual no solo representa un conjunto de conceptos para describir la violencia territorial, sino que también proporcionan las armas del conocimiento para entender cómo se instituyen y legitiman las relaciones entre sociedad-Estado nación-actores criminales. Esta perspectiva, se basa en conceptos como los de territorio violento, en el que la violencia se entiende como un elemento estructurante de la producción de territorialidad (Guerra, 2022); las fronteras del Estado, que revelan cómo la legalidad y la ilegalidad habitan territorios periféricos —a partir del trabajo de Maldonado (2010); perspectivas de gubernamentalidad criminal, por las cuales los grupos de autodefensa y otros actores armados terminan reproduciendo lógicas de control y poder (Vite, 2017; Fuentes, 2015); hasta estudios sobre drogas que muestran su inserción en las identidades locales y aspiraciones sociales —específicamente en el público de jóvenes marginales (Lemus, 2017; Valenzuela et al.).

En este sentido el marco teórico se construye como un instrumento imprescindible para la sintonización de “el Triángulo de la Criminalidad” no solo como un área de conflicto, sino como una oportunidad donde las líneas límite entre la legalidad y la ilegalidad, el orden y el caos, entre la administración y la brutalidad, se reestructuran constantemente (Leco y Aguirre, 2020; Guerra, 2016) con la sociedad apareciendo en ella además de ser repetidamente instruida—a pesar de que generalmente se encuentra asegurada dentro de las decisiones de lealtad, acciones de sospecha y dispositivos de supervivencia (Zaluar, 1994).

La forma en que se ha abordado el presente estudio, motivada por una relación afectiva, territorial y tratando de coadyuvar en el desarrollo regional, tiene la intención de ofrecer una lectura crítica del complejo fenómeno social que se vive actualmente en esta región tocada por la violencia. Explicar “El Triángulo de la Criminalidad”, es hacer un esfuerzo por entender la articulación del Estado con el crimen organizado y la sociedad civil, reconstruyendo un planteamiento que ninguna solución propuesta puede ser efectiva sin una comprensión simultánea de estos hilos entrelazados junto con la explosión de las complicidades estructurales que las mantienen vinculadas. Para ello, partimos de los siguientes planteamientos teórico-conceptuales, que nos permiten problematizar, entender y dar respuesta a la violencia provocada por el crimen organizado en la Tierra Caliente de Michoacán.

Los términos del conflicto: territorio y gentrificación

La territorialidad de Tierra Caliente como un espacio de violencia no puede separarse de su hecho espacial. Guerra (2022) argumenta que, si pensamos críticamente en territorios violentos, entonces es necesario reconocer que la violencia no es un problema criminal aislado, y en este contexto: “en el corazón de la producción del espacio está la violencia”. El territorio se configura como una construcción social, que combina intereses económicos, políticos y criminales que se superponen en el replanteamiento de los límites de la legalidad y el control. Utilizando su investigación, Guerra (2022) también puede describir por qué áreas como Apatzingán, Tepalcatepec o Aguililla se han convertido en el “territorio utilizado para generar y mantener ingresos” (espacios funcionales), lo que explica no solo la permanencia del conflicto sino también las razones muy bien enterradas para hacerlo.

De manera similar, Guerra (2017) señala que a mediados del siglo XX ya existían prácticas violentas vinculadas a luchas agrarias, terratenientes regionales y bandas de matones a sueldo en la Tierra Caliente. Por lo tanto, la violencia en esta región no se inicia con el narcotráfico moderno, sino que tiene raíces tan profundas como un sufrimiento de conflictos territoriales y de poder desde un período histórico que pone al conflicto actual bajo una pesada carga de historia y cultura (Guerra, 2017).

Estado soberano: gobernanza ilegal y márgenes del Estado

Uno de los marcos analíticos más apropiados para pensar en Tierra Caliente es el de los márgenes del Estado. Una interpretación de territorios como la planteada por Maldonado (2010) quien considera espacios como los de la Tierra Caliente no solo como áreas e instituciones fronterizas, sino manifestaciones ambiguas o fragmentadas o incluso cómplices del Estado. Trabajar en estos márgenes, la legalidad se negocia y existe junto a regímenes de control paralelos. Como dice el escritor: "los márgenes son situaciones en las que la ilegalidad se administra como una parte inherente del funcionamiento del Estado" (Maldonado, 2010; 53).

En esta visión no es extraño que finalmente el crimen organizado ha llegado dentro de la forma económica hasta entonces, así como a las instituciones políticas locales. En esas áreas, la gobernanza se lleva a cabo por una compleja red de acuerdos tácitos y mutuamente reforzantes entre funcionarios públicos, líderes comunitarios (a menudo incluidos los llamados 'actores no estatales') y grupos armados. De acuerdo con lo que han señalado claramente Leco y Aguirre en 2020, la política local de Michoacán ha estado operando bajo una lógica de coexistencia con procesos de crimen organizado que nos ayudarían a entender parcialmente por qué estos actores vinculados a la criminalidad aún mantienen química entre su poder político y social con los ciudadanos en algunos municipios como Apatzingán, Tepalcatepec o Aguililla.

Gobernabilidad criminal y autodefensas

La formación de las autodefensas en Michoacán a partir de 2013 es un caso que ofrece mucho para trabajar en la comprensión de la interacción entre el Estado, la sociedad civil y el crimen organizado. Este trabajo sobre la vigilancia colectiva armada desafía el control local para enfrentar a los cárteles; también se involucra en un proyecto de aplicación y castigo, y establece nuevas normas: una microgobernanza virtual⁷. Estos grupos también pueden mutar en formas paralelas de poder a lo que, Vite (2017) nos advierte, no suplanta al Estado por sí solo, sino que imita lógicas de violencia y dominación.

Los argumentos son corroborados por los resultados de Fuentes (2015), quien muestra que en la Tierra Caliente los grupos de autodefensa han actuado como espacios híbridos que se equilibran torpemente entre agendas legítimas y actividades ilícitas. En algunos casos, los grupos de autodefensa se convirtieron en elementos de innovación criminal y militar por sí mismos, como en el ejemplo de Los Viagras que comenzaron como una movilización ciudadana pero rápidamente pasaron a controlar actividades relacionadas en Apatzingán y sus alrededores (Fuentes, 2015).

Desde una perspectiva internacional, Aguirre y Leco (2016) los llaman expresiones de vigilantismo por parte de comunidades locales que creen actuar como guardianes de la democracia y

el orden social cuando las instituciones formales están ausentes o son corruptas. Pero señalan que este tipo de dinámicas generalmente terminan en la violencia de forma autoritaria y la regeneración de nuevos tipos de gobernanza criminal (Aguirre y Leco, 2016).

Narcotráfico, identidades y violencia

Una apreciación de las raíces sociales del narcotráfico en Tierra Caliente también implica consideraciones culturales y orientadas a la identidad. Citando a Lemus (2017): a través de una narrativa cruda nos cuenta cómo surgen los circuitos sociales que sostienen las estructuras criminales en México, cómo los criminales son vistos como alguien a quien admirar o como referencia de poder y respeto en lugares llenos de miseria. Aunque sus personajes están de alguna manera afiliados a prisiones federales, que no son el tema de este último espectáculo, ofrece claves para comprender e incluso moldear el imaginario social sobre dicha estructura criminal.

Por otro lado, Valenzuela, Nateras y Reguillo (2007) investigan cómo la juventud y la violencia están arraigadas juntas en la medida en que las organizaciones criminales ofrecen una forma de subsistencia económica, pero también formas de ser reconocidos a través de la pertenencia a grupos. Aunque su trabajo habla directamente del fenómeno de las pandillas en Centroamérica, estas reflexiones pueden extenderse claramente al caso de Michoacán, donde los jóvenes recurren a redes criminales como una vía hacia el ascenso social y la seguridad (Valenzuela et al., 2007).

Estos procesos socioculturales ayudan a explicar por qué Tierra Caliente es un terreno tan fértil para el crimen organizado. Más que solo la economía ilegal, el narcotráfico se ha convertido en una “organización social y cultural que genera subjetividades, valores y códigos morales diferentes al Estado” (Lemus, 2017; Fuentes, 2015).

Democracia, política local y criminalidad

La investigación de Aguirre y Leco (2016) señala que un aspecto clave es el cruce entre democracia y criminalidad en Michoacán. La delincuencia en sí misma desafía al Estado pero que al mismo tiempo coloniza espacios democráticos. Así como también, los funcionarios también fueron cómplices de fuerzas políticas locales que utilizaron las instituciones locales para la legitimación y el control político. Además, advierten que, para el caso de Michoacán, la violencia es cada vez más una "herramienta de disputa" entre grupos criminales por el poder de control, las finanzas y la acción concertada con actores políticos involucrados en redes clientelistas, elecciones municipales y el acceso a recursos públicos (Aguirre y Leco, 2016).

Este fenómeno es más evidente en los municipios del triángulo de la criminalidad, donde la alternancia política no ha implicado la eliminación del control criminal, sino la redefinición de coaliciones y la replicación de redes de poder local con conexiones a economías ilícitas (Leco y Aguirre, 2020).

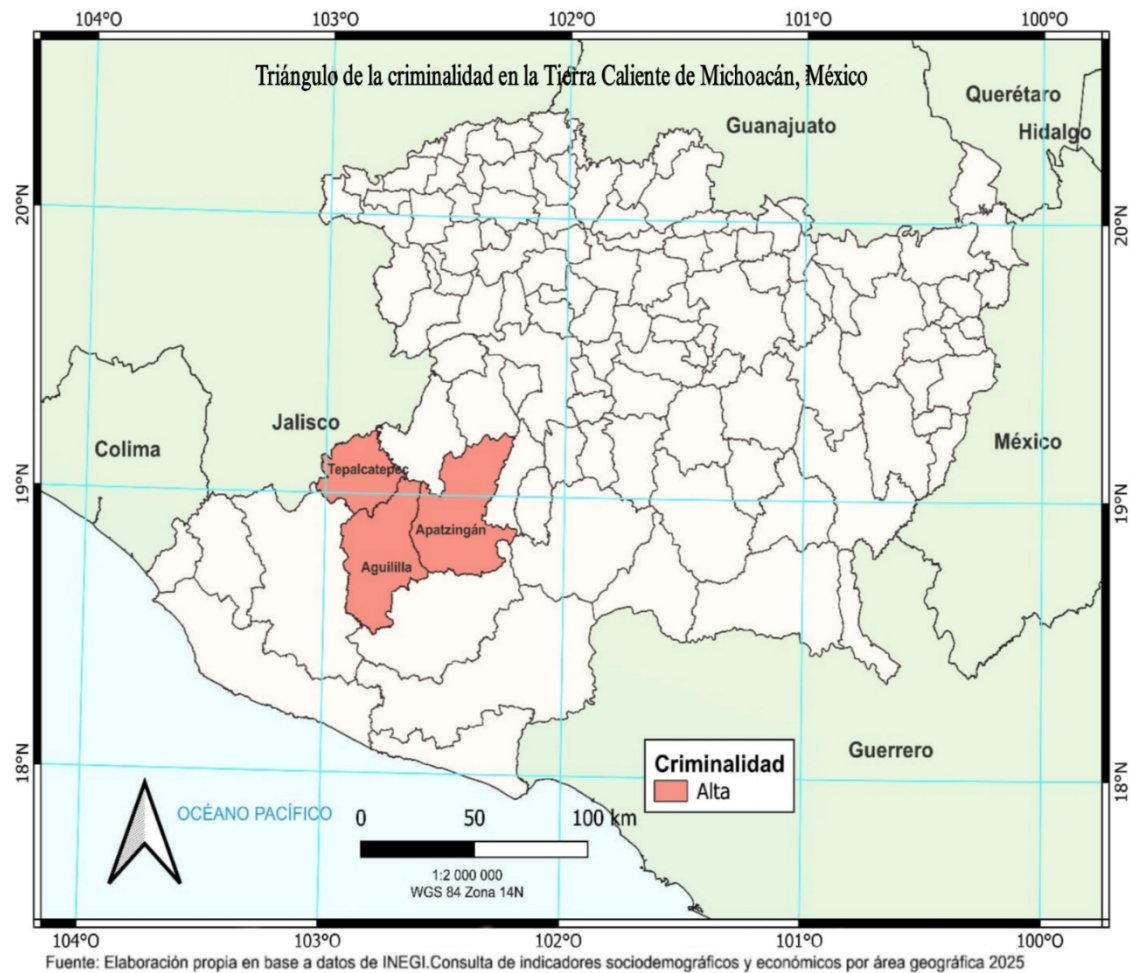
La política de las empresas de seguridad estatal y privada en Tierra Caliente de Michoacán, se sustentan basadas en el marco teórico que nos permite ver esta región como un espacio donde la historia, la cultura, la economía y la violencia convergen en configuraciones de gobernanza híbrida. La relación entre la sociedad de Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla, el gobierno y el crimen organizado es producto de procesos profundamente territoriales arraigados en la historia, las

dinámicas sociales y la cultura que han originado lo que Guerra (2022) considera un auténtico territorio violento. Como tal, requiere una visión tridimensional que reconozca tanto la perpetuidad de la violencia como el potencial de renovación y la reconfiguración social.

III. LA VIOLENCIA EN LA TIERRA CALIENTE DE MICHOACÁN

El área de estudio se localiza al suroeste del estado de Michoacán, que pertenece geográficamente a la subregión conocida como Tierra Caliente. La zona ha estado marginada durante mucho tiempo debido a la dinámica del centralismo estatal, por diversas formas de intereses extractivos —agrarios, madereros, mineros y, últimamente, el narcotráfico— que conducen a una construcción territorial conflictiva (Guerra, 2022).

Figura 1. Triángulo de la criminalidad en la Tierra Caliente de Michoacán, México



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEGI. Consulta de indicadores sociodemográficos y económicos por área geográfica 2025

Sobre la base de este marco geopolítico, dicha investigación propone la categoría analítica del 'triángulo de criminalidad' para reflejar un espacio compuesto por los municipios de Apatzingán-Tepalcatepec-Aguililla en donde las relaciones entre el crimen organizado, el poder político y la intervención armada comunal están estructuralmente entrelazadas.

La sede del sistema, Apatzingán —con más de 130 mil habitantes según los datos del INEGI (2020)—, representa el centro urbano más relevante de esta tríada y ha sido históricamente un referente para la movilización campesina y la construcción de poder local autónomo. Y la ley de propiedad no implica el derecho a asaltar casas (Grimson, 2004; Landau y Dinga, 2013), que se basa

en la creencia de que solo los ladrones necesitan cerraduras en sus hogares en lugar de usarlas como elementos simbólicos contra intrusos que proporcionan seguridad a los seres humanos de peligros fugaces (Barry et al., 1996).

Desde un principio el narcotráfico como economía paralela a la oficial en la década de 1990, cuando Apatzingán se consolidó bajo la lógica territorial del crimen organizado, primero con el cártel del Milenio, luego con La Familia Michoacana y finalmente Los Caballeros Templarios, se utilizaron mecanismos de control social e ideológico sobre la población civil (Guerra, 2017; Maldonado, 2010) para someterla y mantenerla controlada.

Históricamente un bastión del liderazgo ganadero de la región, Tepalcatepec está al oeste de Apatzingán. Con familias armadas, así como el lugar en la economía regional, esta presencia ayuda a entender por qué los primeros grupos de autodefensa organizados en 2013 no pudieron interpretarse como una simple insurrección consumida espontáneamente más que como una forma de redefinir la soberanía local contra dichos cortejos (Vite, 2017). Este municipio también ha sido escenario de enfrentamientos directos con el CJNG desde 2018.

El municipio de Aguililla, por su parte, con población más dispersa y viviendo en las montañas, tiene una historia de abandono estatal. Sin embargo, su importancia geopolítica es en realidad como un punto de acceso clave al oeste de Michoacán en el contexto del papel cada vez más central que La Ruana ha desempeñado en conflictos armados esporádicos en los últimos años. Según Fuentes (2015), este municipio ha pasado de ser un enclave narco a una trinchera de resistencia social permeada por autodefensas, desplazamientos forzados y muertes.

El formado por este triángulo geográfico no puede concebirse como una estructura estática y, precisamente lo contrario, es profundamente dinámico tanto en su dimensión territorial como en las relaciones que lo configuran. En realidad, este llamado triángulo de criminalidad en Tierra Caliente es mucho más que un espacio físico; es una constelación de vínculos sociales, gubernamentales y del crimen organizado que siempre están cambiando, para nuestra sorpresa repentina.

Las características de este triángulo están de inmediato en la movilidad y transformación de los cárteles existentes dentro del lugar. La actividad criminal estalló en la década de 1980, y las siguientes tres décadas dieron lugar a varias organizaciones delictivas que reemplazaron, desintegraron o expulsaron a otras de esas zonas donde fueron protegidas por autoridades gubernamentales corruptas durante años, luchando por nuevos territorios hoy y forzando cambios de guardia que traen consigo nuevos patrones en su mecanismo de control social. Esos movimientos no solo incluyen cambios en la forma de las rutas del narcotráfico, sino también desarrollos en las alianzas políticas públicas y estructuras económicas que compiten en esas comunidades.

Además de esta reorganización criminal, hay cientos de miles de desplazamientos forzados cuyas marcas son indelebles. En ciertas áreas, barrios enteros han sido reducidos a los visitantes imponentes del conflicto en lugares que ahora se asemejan a una guerra entre lo que uno paga y lo que viene. El testimonio de quienes habitan esta región refleja un profundo sentimiento de desarraigo y dolor, expresión de estar "muertos en vida" ante la vida a merced en un territorio donde el poder cambia de manos y las reglas se imponen por la fuerza. Los medios nacionales han informado de comunidades que pasan de un día normal a un éxodo masivo en horas, mientras escuelas, centros de salud y negocios cierran (Animal Político, 2018; 24 Horas, 2018).

El dinamismo también se refleja en términos de vida social y política como un carácter. El encuentro de la sociedad con las partes armadas es ambiguo y contradictorio: el miedo se niega con la negociación, que a su vez neutraliza la dependencia. Las comunidades en muchos casos, en lugar de ser solo víctimas, en realidad son absorbidas por las redes de poder local de una forma u otra debido a la coerción económica, protección y presiones por la lealtad. Estas condiciones de transferencia convierten al crimen organizado en una entidad que no solo es un proveedor de violencia sino un fenómeno de gobernanza, lo que explica en gran parte por qué su influencia sigue siendo tan penetrante.

Así que este triángulo geográfico y relacional es un sitio en constante cambio en el que cada cambio de actor, confrontación y desplazamiento también redibuja el mapa físico junto con las relaciones de poder y formas de vida. Para entenderlo, hay que ver que aquí la violencia no es algo transitorio, sino parte del modelo social y que el núcleo de Tierra Caliente reside exactamente allí en esta continua interacción entre el territorio: sociedad, estado y crimen.

Entre las múltiples razones por lo cual se eligió esta área tiene que ver con su peso simbólico, político y criminal; además, existe la posibilidad de medir la tensión estructural en la estatalidad mexicana que este lugar representa a nivel nacional. Aquí es donde las contradicciones de seguridad y violencia, desarrollo y despojo, autoridad legal estatal y poder criminal de facto se muestran más que evidentes.

La criminalidad en la Tierra Caliente

La región de Tierra Caliente hace tiempo que dejó de ser una verdadera periferia geográfica y administrativa económica, para convertirse en el escenario de uno de los procesos sociopolíticos más complejos y reveladores a nivel nacional en México. Esto en realidad habla del "Triángulo de la Criminalidad" —Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla— que parece un laboratorio de interacciones entre el Estado, la sociedad y el crimen organizado: la violencia pasó de ser un hecho ocasional a un método sistémico para la organización y el control social (Maldonado, 2010; Guerra 2022).

Más que una batalla, debido a su territorio y porque la historia de cada sitio se suma con identidades locales, trayectorias relacionadas con la política y corrientes de encubrimiento administrativo. La Tierra Caliente es una región emblemática del inframundo mexicano que ha pasado por varias fases de reconfiguración criminal, desde su absorción tradicional por los cárteles, hasta nuevas estructuras híbridas como las autodefensas y llevando a la aparición violenta y expansiva del Cártel de Jalisco Nueva Generación (Guerra, 2017; Aguirre y Leco, 2016).

Tartar de reducir todo a la situación a una batalla de criminales contra funcionarios puede constituir una peligrosa simplificación debido a que son múltiples factores que lo provocan. El triángulo geográfico es, en primer lugar, una relación triádica donde la sociedad, el gobierno y el crimen organizado están entrelazados forjando nuevas alianzas, rupturas y pactos que redibujan diariamente los límites territoriales de la soberanía. Como señala Aguirre y Leco (2020) lo que sucede en estos municipios no es solo un problema de criminalidad sino "una reorganización de la política local basada en lógicas criminales".

Por lo que la violencia se extiende más allá de las repercusiones visibles de estas dinámicas cotidianas. El rango va desde desplazamientos forzados a gran escala hasta el abandono de poblaciones enteras con muy poca capacidad de resistencia, pasando por la gobernanza informal por

la fuerza y la lealtad, y legitimidades paralelas donde el crimen organizado aparece como proveedor de seguridad, justicia y sostenibilidad económica básica (Fuentes, 2015; Flanigan, 2014). La incertidumbre cotidiana que se entrelaza en la experiencia de la vida urbana no es un vago sentido existencial de peligro; se siente más como tener un pie en el olvido (Animal Político, 2018; J. L., 2015).

Esta evaluación de resultados intenta desentrañar esa intrincada red de cambios en la Tierra Caliente durante tres décadas. Su enfoque histórico-territorial muestra cómo la violencia se ha extendido no solo en el espacio, sino también en términos simbólicos y sociales: desdibujando las líneas entre lo legal e ilegal, entre el estado y el criminal, lo público y lo privado. Así que entender la esencia del Triángulo de la Criminalidad significa darse cuenta de que no se trata solo de una disputa territorial, sino de cómo la organización criminal penetra, negocia estratégicamente y se legitima dentro del espacio político y social regional (Maldonado, 2010; Guerra et al. 2022; Valenzuela et al. 2007).

Los conflictos locales (1995–2025)

Los cambios en las estructuras criminales, sociales y políticas que ocurrieron a lo largo de tres décadas (1995–2025) que han marcado un importante proceso de transformación en Tierra Caliente de Michoacán, la cual se puede dividir por períodos.

El crimen organizado en la zona entre 1995 (cuando Aguililla estaba hasta entonces controlada por una red local de producción y tráfico de marihuana y amapola) y 2005, mientras permanecía relativamente fragmentado. En esta etapa, el poder criminal coexistía con las estructuras tradicionales de caciques locales y partidos hegemónicos, permaneciendo, en palabras de Guerra (2017), como una "violencia localizada y contenida".

Michoacán experimentó un período de tasas de homicidio relativamente bajas entre 1995 y 2005, con tasas anuales de homicidios que oscilaban entre 700 y casi 900 asesinatos intencionales (SESNSP, 2005). Pero el estado fue golpeado por una racha sangrienta de violencia que comenzó en 2007, tras el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Para 2011, los homicidios intencionales superaron las 2 mil víctimas (SESNSP, 2012).

Michoacán ocupó en 2021 el tercer lugar a nivel nacional por número de homicidios dolosos con un total de 2,732 y una tasa de 55.0% en comparación con el promedio nacional del INEGI (SESNSP, 2022). La mayoría de estos homicidios se concentraron en la Tierra Caliente alrededor de Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla, campos de batalla clave entre cárteles y grupos de autodefensa (Guerra, 2022; Maldonado, 2010).

Como un enfoque estatal oficial durante la segunda mitad de los años 2000 a nivel federal bajo Felipe Calderón, esta estrategia de militarización cambió drásticamente este escenario. El combate provocó la fragmentación del cártel y la aparición de nuevos actores de mayor violencia y sofisticación, como La Familia Michoacana seguida por Los Caballeros Templarios (Guerra, 2022). No solo realizan prácticas ilegítimas, sino también un régimen de gestión que aborda el control social articulado a través de discursos morales y símbolos religiosos que les permite servir como defensores de la población (Maldonado, 2010).

El año 2013 es un hito en la aparición de "autodefensas", particularmente en Tepalcatepec y La Ruana. El movimiento comenzó espontáneamente como una reacción comunitaria a los abusos de

Los Caballeros Templarios, una entidad que operaba mediante extorsión, secuestro y ejecuciones (Vite, 2017; Fuentes, 2015). Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que muchas de las fuerzas de autodefensa se habían transformado en organizaciones parapoliciales o mafiosas, replicando mecanismos de control armado y formando alianzas con actores estatales (Aguirre y Leco, 2016; Guerra, 2022).

De 2019 a 2025, el CJNG entra en la contienda y la violencia empeora. Aguililla, por otro lado, emergió como un bastión estratégico de las batallas del CJNG y ataques aéreos con drones explosivos que llevaron a bloqueos en los que la región quedó completamente aislada. Los conflictos se volvieron transfronterizos y fueron guiados únicamente por intereses económicos y armados que excedieron el nivel estatal (Leco y Aguirre, 2020; Guerra, 2022).

Las alianzas: gobierno, crimen organizado e interacción social

El análisis muestra que la interacción sociedad-gobierno-crimen organizado en los municipios que forman el triángulo del crimen no es ni estática ni homogénea, sino que se caracteriza por la variabilidad entre las dinámicas locales. Más que la ausencia del Estado se trata de una presencia fracturada e incierta se superpone a —y a veces comprende— actores criminales (Maldonado, 2010).

En Apatzingán, las redes criminales han tomado el control de las instituciones durante mucho tiempo. Donde las estructuras político-administrativas están más infiltradas por el crimen organizado, también lo están las listas partidistas, las campañas electorales y la impunidad como consecuencia de la complicidad institucional (Leco y Aguirre, 2020). Esta simbiosis ha redefinido la percepción social, haciendo que los grupos criminales no solo sean vistos como guardianes que protegen a aquellos fuera de su mercado de operaciones si emiten tarifas de protección, sino como proveedores de estabilidad y orden en un contexto donde la respuesta del Estado se percibe como ineficaz para confrontar esto (Guerra, 2022).

El caso de Juan José Farías Álvarez (“El Abuelo”) es paradigmático en Tepalcatepec. Él personifica la intrincada amalgama de liderazgo comunitario, grupos de autodefensa y criminalidad. Tepalcatepec es una ilustración, sostiene, de cómo las comunidades no solo se “autopolician” con armas, sino que también generan nuevas formas de autoridad armada por las cuales los líderes locales desempeñan roles de justicia, seguridad y gobernanza que superan incluso a los del Estado (Vite 2017).

El CJNG ha desarrollado un régimen territorial de gobernanza criminal completa en Aguililla, expulsando a las autoridades municipales y controlando las carreteras; restringiendo la llegada de fuerzas federales e imponiendo una estricta vigilancia social (Aguirre y Leco, 2016; Guerra 2022). Dentro de este vacío de poder, la soberanía estatal es funcionalmente inexistente y el día a día en los territorios está mediado a través de estructuras criminales que utilizan la violencia como un mecanismo para gobernar.

Estos resultados coinciden con lo que defiende Maldonado (2010): que las periferias del Estado no son vacíos, sino espacios donde el poder estatal se practica selectivamente y se negocia, coexistiendo con formas de poder ilegal.

La captura institucional en el estado de Michoacán fue confirmada a través de diferentes informes. En la narrativa de Animal Político (2014a), Changoonga (2014), Proceso (2009), entre 2013

y 2018 al menos 45 funcionarios municipales, incluidos alcaldes, concejales o directores de Seguridad Pública en el frente de guerra contra el crimen organizado —como los de Tierra Caliente— fueron detenidos. Por ejemplo, se informó en 2014 sobre la detención de 14 policías municipales en Apatzingán que trabajaban con células de Los Caballeros Templarios (Animal Político 2014a). La importancia de este fenómeno fue reconocida por Leco y Aguirre (2020), quienes argumentaron que ilustra el más profundo entrelazamiento entre las estructuras políticas locales y las redes criminales, dando lugar a un orden híbrido en que lo legal e ilegal están interconectados.

El control por el territorio y disputas locales

Esta es la dimensión donde la territorialidad se vuelve crucial para entender la gobernanza criminal en Tierra Caliente. No se trataba solo del control del espacio, sino también de los símbolos. Como explica Guerra (2022), el territorio es también un escenario donde los grupos que producen y reproducen su legitimidad con violencia no solo dominan los beneficios de acceso como rutas y recursos, sino que crean imaginarios de poder político.

En Apatzingán, una estrategia de vigilancia basada en el acecho y el parasitismo económico se suministró correctamente (Fuentes, 2015). Ahora, el territorio de este lugar se ha dividido en zonas de influencia que se identifican con una percepción: cada barrio o comunidad pertenece a un "dueño".

El municipio de Tepalcatepec: Menos territorio, pero en forma de comunidad. La justicia local era llevada a cabo por autoridades armadas, quienes arbitaban disputas, procesaban delitos menores e imponían toques de queda (Vite, 2017), permitiendo que existiera un sentido de orden y seguridad, aunque al precio del autoritarismo local.

El CJNG, mientras tanto, ha llevado a cabo bloqueos extendidos, asaltos a convoyes federales y ha completado el control de carreteras clave en Aguililla. Han habilitado características espaciales que aíslan comunidades, exigen lealtades y utilizan el espacio como instrumento de presión política, así como los mismos rescates por todas las partes involucradas, contra el gobierno federal (Aguirre y Leco, 2016; Guerra, 2022).

Pero la dominación dentro de Tierra Caliente no es solo una cuestión de fuerza armada; implica la reestructuración económica y social de los municipios. Varios estudios recientes han documentado guerras territoriales durante el período 2018-21 entre el CJNG, los remanentes del liderazgo de Los Caballeros Templarios y las células de autodefensa en más de 20 municipios de Michoacán, por ejemplo, Apatzingán, Tepalcatepec, Aguililla (Leco & Aguirre, 2020). Pero estos conflictos no solo se dirigen a rutas estratégicas, también se extienden a la vida diaria: los bloqueos e incluso la extorsión han resultado en la parálisis de procesos económicos enteros —Aguililla es el más afectado por este factor ya que el CJNG ha logrado dejar regiones aisladas durante semanas (Animal Político, 2014b; Guerra, 2022).

La gobernanza local y la economía ilegal

Las consecuencias sociales del sistema de gobernanza criminal en Tierra Caliente, y más específicamente en el llamado Triángulo de la Criminalidad conformado por Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla, han sido transversales en mayor medida desde un punto de vista estructural, socavando no solo la dinámica sociopolítica-institucional sino también la socioeconómica-cultural

dentro de sus comunidades. En la raíz de esta investigación está la sentida creencia de uno de sus autores (un periodista local) de que más allá de las estadísticas e informes, hay rostros humanos, identidades y fenómenos sociales complejos que no pueden reducirse a meras métricas de violencia.

No solo los actores armados aquí son grupos de crimen organizado que tienen redes de poder económico profundamente intrincadas. Las ganancias del narcotráfico, la tala ilegal, la extorsión y las redes de protección podrían generar más de 30 mil millones de pesos al año en Michoacán (Flanigan, 2014; Fuentes, 2015). Por ejemplo, en Apatzingán, se ha registrado extorsión incluso en pequeñas medidas de actividad como vender artículos en la calle u operar dentro de un sistema de transporte público, apuntalando una economía criminal que influye en todos los aspectos de la vida cotidiana (Fuentes, 2015).

Frente a esta economía ilegal, las fuentes legales de sustento a menudo se representan como un espasmo, lo que solo refuerza la dependencia de la población en las estructuras mafiosas, y estas también son empleadores para algunos (los préstamos dan préstamos algunos trabajos sociales) (Flanigan, 2014).

Por un lado, el fenómeno de la criminalidad en el Triángulo de Tierra Caliente se basa en orígenes históricos y socio-territoriales profundamente arraigados (Guerra, 2022); por otro, germina respectivamente hoy en niveles alarmantes. Datos estructurales y multidimensionales confirman el conflicto. Durante los años 2020-2023, por ejemplo, las tasas de percepción de inseguridad en los municipios de Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla superaron el 85 % (INEGI) y la región reportó una tasa promedio de más de 95 homicidios/100,000 habitantes en su conjunto (SESNSP), cifras que contrastaron notablemente con los promedios nacionales.

La violencia no solo ha afectado a las poblaciones más marginadas. En 2023, REDIM alerta que niños y adolescentes siguen en riesgo de reclutamiento forzado en toda la región con municipios distinguidos por una mayor presencia de células armadas. Asimismo, ACM ha observado un aumento significativo en los informes de violencia sexual y desapariciones asociadas con grupos criminales contra mujeres de 37 años o menos (CEAV, 2023).

En términos económicos, para CEESP (2024) la consecuencia del cierre de negocios formales en municipios como Apatzingán se ha experimentado como un aumento superior al 22% en la economía informal en 2018-23. Así, los límites se expanden también para abarcar actividades ilegales —extorsión, tala ilegal y narcotráfico— como formas de vida para segmentos crecientes de la población, un orden observado en estudios anteriores sobre gobernanza criminal en la región (Flanigan, 2014; Fuentes, 2015).

La UNODC (2023) advierte que áreas como Tierra Caliente se están transformando cada vez más en centros de tráfico internacional de drogas, y por lo tanto exacerbarán esta tendencia global al alza. Esto refuerza la noción de Maldonado (2010) de que la violencia en los márgenes del Estado no es un mal funcionamiento sino más bien un terreno necesario para la reterritorialización material y política.

Una de las cosas que la violencia ha hecho a Tierra Caliente es forzar el desplazamiento. Entre 2013 y 2019, más de 16,000 personas de Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla —algunos de los municipios más afectados— fueron documentadas entre los desplazados en Michoacán por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH 2020). Específicamente, Aguililla experimentó una disminución de población de más del 20% entre 2020 y

2025 según un análisis del INEGI (2020), debido en gran parte al desplazamiento interno masivo causado por la ofensiva del CJNG en la zona (Guerra, 22).

Los desplazamientos deconstruyen las relaciones económicas, desmantelando carriles en la comunidad (J. L., 2015) y alimentando la precariedad. El resultado más visible y brutal es el desplazamiento forzado que ahora, en muchas comunidades, se ha convertido en un hecho cotidiano. En los municipios de Tierra Caliente, entre 2013 y 2015, se registró un éxodo de más de 15,000 personas vinculado al auge de Los Caballeros Templarios y la aparición de grupos de autodefensa (Guerra 2015). Datos recientes del INEGI (2020) informan que Aguililla, un epicentro del conflicto perdió más del 10% de su población entre 2020 y 2025 debido a desplazamientos masivos forzados por los enfrentamientos territoriales vinculados al choque entre el CJNG y los restos desmoronados de un grupo local conocido como Los Viagras (Guerra, 2022; J. L., 2015).

Estos desplazamientos no solo implican dejar su hogar sino también la ruptura de vínculos con las redes familiares y económicas que contribuyen a las estrategias de supervivencia comunitaria, lo que resulta en una pérdida de su fuerza laboral y miles de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Junto con el éxodo masivo de sociedades enteras, esto va acompañado de un colapso catastrófico de los servicios públicos normales. Tal es la realidad que documenta Maldonado (2010), en la que un vacío institucional permite que las escuelas se cierren durante meses, los centros de salud sean abandonados y los programas sociales se paralicen, especialmente en áreas rurales alejadas.

Estos incidentes ocurrieron en un contexto continuo: por ejemplo, Animal Político (2014b) informó sobre los asesinatos de directores de seguridad pública en diferentes municipios —que suelen ir acompañados de amenazas a funcionarios locales y renuncias masivas por parte del personal público debido al miedo— y que esto virtualmente detuvo la administración municipal. Leco y Aguirre (2020) subrayan que, dentro de estos vacíos, el crimen organizado ha comenzado a "normatizar" el estilo de vida, es decir, impedir que el estado intervenga en espacios urbanos como la resolución de conflictos o la administración informal de justicia.

La cara económica de la gobernanza criminal es importante dimensionarla, más que solo el árbitro de la violencia, el crimen organizado teje una red de intereses económicos bien integrados en la vida de la comunidad. Según Fuentes (2015), en varios lugares de Tierra Caliente, la producción y el tráfico de drogas, así como la tala ilegal y la extorsión, se han convertido en el sustento principal para cientos de familias, desplazando efectivamente las prácticas económicas legales e incluso reestructurando los patrones laborales locales.

Los grupos del terror han logrado imponer su propio esquema, como La Familia Michoacana o Los Caballeros Templarios que son capaces de asegurar la aquiescencia de su comunidad, es porque han creado legitimidad social proporcionando empleos, préstamos y "servicios sociales", escribe Flanigan (2014), fluyendo de un modelo de negocio exitoso que contrarresta efectivamente la criminalización al combinar la desviación con la funcionalidad de tal manera que los dos casi se vuelven sinónimos.

Otra de las fuentes como Changoonga (2014) ha sugerido que funcionarios municipales, alcaldes y legisladores han sido intermediarios activos en la negociación y beneficio económico directo de estas actividades ilegales en municipios como Apatzingán, un fenómeno que Riva Palacio (2014) dice proporciona la evidencia más clara del comportamiento de narcoestado.

Lo que más daño ha hecho, social y culturalmente, es normalizar la violencia. En Tierra Caliente, Vite (2017) explica que la violencia se ha naturalizado como un recurso legal de mínima

capacidad de resolución de conflictos, promoviendo la creación de comunidades emocionalmente silenciosas en las que los asesinatos, secuestros y extorsiones son parte de la vida cotidiana. Maldonado (2010) explica que esta "naturalización del terror" genera un clima de miedo y silencio, hasta el punto de que denunciar equivale a un anuncio de muerte autoimpuesta. Esto corresponde a los testimonios reportados en Proceso (2009) que son testigos de la complicidad por parte de algunos alcaldes y policías con grupos criminales, pero optaron por no denunciar bajo amenaza que podría ejecutarse contra ellos.

El desgarramiento del tejido social es quizás uno de los fenómenos más profundamente arraigados y difíciles de deshacer. Según Guerra (2022), las lealtades de las comunidades en Tierra Caliente se han depreciado internamente a medida que familias enteras se dividen entre aquellos que apoyan a varios grupos armados, incluidos las fuerzas de autodefensa y las facciones criminales. Esta polarización crea dentro, así como fuera, tensiones que solo ayudan a llenar un círculo vicioso de violencia y desconfianza y preparan el terreno para prevenir a toda costa cualquier consenso comunitario para la paz.

Como señala J. L. (2015) describe a su vez cómo los vecinos que anteriormente se unían por lazos de solidaridad y parentesco hoy en día se transforman en enemigos no comprometidos con un poder destructivo irracional, generando el ciclo interminable de castigo y violencia.

Además, el fenómeno de la gobernanza criminal implica una disputa por el territorio; material y simbólico. No es solo una lucha armada: es un proceso que además de crear nuevos poderes gobernantes capaces de imponer sus normas, recopilando lealtades esponjosas o destruyendo las antiguas, que infringe las ya vigentes; para coser tributos informales y procesar justicia, reemplaza las funciones mínimas correspondientes ante un Estado. Los grupos criminales en algunos casos incluso han llegado a financiar festivales de santos patronos, proporcionar "seguridad" a los residentes y mediar en conflictos locales; estos esfuerzos representan un modelo de formas cotidianas de control material y social que constituyen un sistema paralelo y violento de gobierno que la población a veces percibe como una alternativa efectiva a instituciones estatales altamente corruptas o ausentes (Flanigan, 2014).

Los impactos sociales y la gobernanza informal que operan en el Triángulo de la Criminalidad en Tierra Caliente caracterizan perfectamente un área en la que la violencia ha dejado de ser una excepción para convertirse en una forma estructural de control político, social y económico. La violencia no se mide solo en términos del número de asesinatos o desplazamientos, sino como un proceso que remodela todas las esferas de la vida comunitaria, generando un orden social híbrido que relativiza la dicotomía entre lo lícito e ilícito (Maldonado, 2010; Leco & Aguirre, 2020; Guerra, 2022; Flanigan, 2014).

Esta es una visión esencial para cualquier intervención política seria o política pública en la región, ya que permite ver que la violencia en Tierra Caliente tiene tanto de política y economía como de criminal. La discusión del caso de Tierra Caliente constituye un poderoso ejemplo que confirma la hipótesis de que el crimen organizado es más que un actor económico ilegal: representa un proyecto político y social capaz de construir sus propias formas de gobernanza paralela (Maldonado, 2010; Guerra, 2022). Dentro de esta área, las organizaciones criminales se han solidificado como auténticos ejércitos de facto, desempeñando fundamentalmente trabajos que en el pasado habían sido una prerrogativa gubernamental: iniciativas para hacer dinero (Vite, 2017), provisión de justicia

(Flanigan, 2014), y procuración de seguridad y ahora frecuentemente responsables de la aplicación casual de leyes morales y culturales sobre la sociedad civil.

El análisis de los hallazgos indica que el crimen organizado ha logrado penetrar las estructuras políticas locales, estableciendo regímenes híbridos, en los que el espacio legal e ilegal se difuminan (Leco & Aguirre, 2020). No se trata de venalidad personal o de altos funcionarios coludiéndose con grupos criminales, sino de la coexistencia en espacio y tiempo de sistemas políticos regionales en los que las decisiones gubernamentales, los procesos económicos y el orden social se entrelazan con intereses criminales (Changoonga, 2014; Proceso 2009). Casos como los registrados en Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla ilustran cómo otras administraciones han encarcelado o acusado a alcaldes, directores de seguridad pública y fuerzas policiales municipales por su supuesta colusión con grupos criminales, lo que ha fortalecido la idea de una narco-gobernanza que lograría capturar una buena parte de las instituciones regionales (Animal Político, 2013; 2014a; 2014b).

La aparición de grupos de autodefensa —considerados con entusiasmo como la fuerza original contra la violencia inusual en Los Caballeros Templarios o CJNG— ha beneficiado una paradoja desastrosa. Aunque surgieron como una respuesta popular a la ausencia del Estado y al choque criminal, se han convertido en actores armados, que en muchos casos emulan prácticas del crimen organizado —incluyendo la imposición de cuotas, impartir justicia por su cuenta y el control territorial a través de la violencia (Fuentes, 2015; Vite, 2017). Esta mutación ha llevado a que el vacío entre protector comunitario y autoridad criminal emergente se llene con una proliferación de actores violentos (Flanigan, 2014).

De manera similar, las acciones de pacificación de estilo militar han demostrado tener solo un efecto limitado y en algunos casos han empeorado la ruptura de poderes criminales. En cambio, operaciones como la desplegada en 2014 con tropas federales a la vanguardia no solo no lograron dismantlar redes criminales, sino que también produjeron una reorganización estratégica de los cárteles y fomentaron nuevas células más violentas y menos jerárquicas que multiplicaron los centros de poder armado en la región (Aguirre & Leco, 2016; Guerra, 2022). Esa misma crítica es compartida por Riva Palacio (2014), quien menciona que las intervenciones militares han servido para reposicionar ciertos grupos criminales, alianzas políticas implícitas.

Por lo tanto, la violencia en la Tierra Caliente se configura como una violencia profundamente territorial, orientada a construir soberanías parciales sobre el espacio, la economía y las subjetividades locales (Guerra, 2022). Esto va más allá del control de las rutas del narcotráfico y se adentra profundamente en la apropiación territorial en general: la imposición de reglas sociales, la regulación de la vida diaria y la legitimación a través de la violencia como una forma de gobernanza aceptable (Maldonado, 2010; Flanigan, 2014). La violencia física y simbólica se ejerce con estos medios de control, cambiando la forma y referencia de autoridad y legitimidad dentro de las comunidades.

Esta interpretación está en línea con las advertencias de Valenzuela et al. De hecho, tal escenario caracteriza los entornos descritos por Baiocchi y Graizbord. Debido a que no hay «una salida fácil en el Brasil urbano», las redes criminales se convierten en sitios de identidad, comunidad y supervivencia (2007). En Tierra Caliente, el crimen organizado gana su legitimidad porque proporciona respuestas —aunque violentas e inestables— a necesidades sociales que el Estado no satisface (Fuentes, 2015; Leco y Aguirre, 2020). Juárez et al. (2008) y más recientemente Flanigan (2014) y J. L. (2015) ilustran cómo algunos grupos criminales crearon estrategias de aceptación

comunitaria a través de obras sociales, financiamiento de festividades religiosas o contribuciones financieras a familias afectadas (“algunos” ya que el sentido de lealtad territorial estaba lejos de ser universal considerando los equilibrios intergrupales). Esto ha reforzado la percepción de que, a pesar de su violencia, este tipo de actor a veces está más presente y es “más efectivo” que las instituciones formales.

Por lo tanto, el Triángulo Criminal de Tierra Caliente no es solo una geografía espacial ocupada por criminales, sino que se convierte hoy en un modelo de laboratorio de gobernanza criminal donde se articulan poderes, de facto, intereses económicos y legitimidad local. Reconocer esta realidad nos obliga a pensar en políticas públicas más allá de lo estrictamente punitivo, sino también a través de estrategias que comprendan la dimensión sociocultural y territorial del conflicto tanto como la profundidad de las fracturas históricas en las que se precipitó la consolidación de estas soberanías criminales (Maldonado, 2010; Guerra, 2022; Leco y Aguirre, 2020).

CONCLUSIONES

La Tierra Caliente, y sobre todo el triángulo de Apatzingán-Tepalcatepec-Aguililla, se ha convertido en el México contemporáneo en uno de los laboratorios más sofisticados de gobernanza criminal que existe actualmente; un espacio donde la violencia ya no sirve meramente como una forma instrumental de disciplina social, sino como un medio estratégico y político para gobernar territorios y cuerpos, regular economías y disciplinar sociedades.

“El Triángulo de la Criminalidad” no está reservado para esta porción de territorio. Su esencia es relacional. Es un triángulo oscuro y mortal donde actores y dinámicas, espacio, sociedad, gobierno y crimen organizado convergen. Estos tres vértices se han estado nutriendo mutuamente durante décadas, construyendo un orden paralelo en el que la violencia no es solo la excepción; es la norma dominante que gobierna la vida cotidiana (Leco y Aguirre, 2020; Vite, 2017).

Aunque la crudeza de la impunidad y la naturaleza visible es nueva, el fenómeno criminal en Tierra Caliente es histórico (vinculado al territorio) a través de formas difusas o elusivas sociales o culturales. No se trata simplemente de crimen organizado, por no hablar de un problema que pueda resolverse con las herramientas de seguridad. Esto constituye el fruto de una larga historia marcada por conflictos agrarios, estructuras caciquiles, exclusión económica y fragmentación política (Guerra, 2017; Maldonado, 2010).

La sociedad local ya no es una mera víctima. En muchos casos, sectores de la comunidad han tenido funciones ambiguas: cómplices, benefactores, víctimas o incluso ejecutores directos en la producción de violencia y gestión del orden local (Fuentes, 2015; Vite, 2017). Este resultado obliga a problematizar las estrategias de pacificación de una manera que ya no embriague a la comunidad, sino que sepa percibir sus contradicciones y su continua capacidad de actuar.

El gobierno, ya sea el gobierno municipal, estatal o federal, ha fallado una y otra vez en establecer un control real o duradero. Peor aún, y en más ocasiones, es cooptado por el mismo sistema o neutralizado formando parte de redes de impunidad, corrupción y complicidad (Leco y Aguirre, 2020).

El uso de estrategias militares y policiales, sin acompañarlas de cambios estructurales, pronto se vuelve insuficiente o empeora el problema. Se ha señalado que las intervenciones militares solo

han dividido más las estructuras criminales del Chapo y también la mayor diversidad de actores ahora disputa ciertas áreas (Aguirre y Leco, 2016).

La violencia en Tierra Caliente también es cultural. El crimen ha construido con éxito imaginarios de poder y redes simbólicas en las que se presenta como poder, seguridad, justicia u obligación. Los líderes criminales a menudo son considerados como autoridades legítimas en muchas comunidades, lo que afianza aún más su posición y los hace difíciles de dismantelar (Lemus, 2017; Valenzuela et al., 2007).

Esta colusión entre sociedad, estado y crimen organizado es el núcleo del triángulo de la criminalidad. No es solo un campo de batalla de bien contra mal, sino que también se convierte en el paisaje de lealtades, compromisos, intercambios y miedos. Pero romper este triángulo no se trata solo de erradicar los cárteles, significa dismantelar las estructuras locales de poder, esas redes de economía ilegal y lealtades sociales que los sostienen (Maldonado, 2010; Leco y Aguirre, 2020) que le van vida social.

México tiene un gran desafío respecto a los impactos y propuestas de esta realidad. Se necesita una estrategia totalmente diferente que vaya más allá de la bélica y gire en torno a tres ejes principales:

La reforma en las formas estatales locales. Las instituciones municipales y estatales deben ser restauradas desde cero, con guardias confiables contra la corrupción, y mantenidas en el más alto respeto. La legitimidad del estado no deriva exclusivamente de la fuerza —que puede erosionarse en la medida en que solo la violencia sostiene su reclamo de autoridad— sino que debe estar conectada a abordar las necesidades diarias: necesidades de justicia, servicios, seguridad” (Leco y Aguirre, 2020).

En cuanto a la intervención social y cultural, el cuerpo de la violencia se dismantela, no solo con armas, sino también con nuevas narrativas culturales y proyectos de vida para los jóvenes. Se requieren políticas públicas para romper el ascensor social que supone el estatus del narcotráfico; destacando alternativas en educación, cultura y economías legales sostenibles (Valenzuela et al., 2007; Lemus, 2017).

Respecto al desarrollo territorial diferencial, las soluciones deben comenzar con un diagnóstico local y nunca una receta nacional homogénea. Tierra Caliente exige una política territorial que reconozca tanto su historia y economía como sus particularidades culturales, pero también que convierta a la comunidad en un actor proactivo no solo receptivo (Guerra, 2022).

El registro de Apatzingán, Tepalcatepec y Aguililla ilustra que la violencia siempre es relacional y está arraigada en problemas estructurales endémicos. En el siglo XXI, el destino de Tierra Caliente depende de qué tan bien el estado y la sociedad impulsada por el sombrero puedan forjar nuevos pactos de gobernanza legítima. El triángulo de la criminalidad es una cosa masiva, casi inextricable de profundas complicidades y demandas competitivas tejidas durante décadas; también habla de un costo humano construido sobre alternativas reales donde históricamente la justicia, la seguridad y la esperanza han sido ahogadas por niveles de criminalidad perniciosa.

Pero la violencia no es una conclusión inevitable. Esta es una región que se ha reinventado, y puede ser capaz de hacerlo nuevamente. Lo difícil es transformar el dolor colectivo en poder colectivo y convertir la crítica en políticas públicas que finalmente pongan la dignidad humana en el centro.

Este trabajo, muestra la diferencia entre lo que se disputa y lo que hace el entorno de un Triángulo criminal en Tierra Caliente: mucho más que eso, refleja memorias vivas, profundas desigualdades y una compleja complicidad social del Estado con el crimen organizado en un marco donde la violencia no es solo una especie cotidiana sino también una estrategia política (Flanigan, 2014; Fuentes, 2015). Pero estas dinámicas no ocurren solo en Apatzingán, Tepalcatepec o Aguililla. Lo más inquietante es que el llamado triángulo de la criminalidad se está clonando a una velocidad imparable en otras regiones de Michoacán e incluso a través de estados, manejando con una destreza inesperada para ganar terreno en nuevas geografías, estructuras sociales y sectores económicos (Riva Palacio, 2014; Changoonga, 2014).

El caso de que México alude hacia un modelo en el que la criminalidad termine siendo no simplemente un dilema de seguridad, sino que genere una estructura de gobernanza alternativa sin más libertad y sin estado democrático. El diagnóstico debe trascender lo punitivo —algo más, indeterminado— para invertir en investigación científica capaz de identificar los orígenes estructurales de la criminalidad en su fuente y diseñar políticas públicas que reconstruyan el pacto social desde la justicia, la dignidad y la esperanza. Es un gran desafío, pero también ignorarlo implicaría un acto de resignación pasiva ante la silenciosa ampliación de estas soberanías criminales que están redibujando la geografía económica, política y social de nuestro país.

Fuentes consultadas:

- Aguirre, J. I., & Leco, C. (2016). "Democracy and vigilantism: The case of Michoacán, Mexico". *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 5(4), 17–28. <https://www.crimejusticejournal.com/article/view/825/583>
- Flanigan, S. T. (2014). "Motivations and implications of community service provision by La Familia Michoacana / Knights Templar and other Mexican drug cartels". *Journal of Strategic Security*, 7(3), 63–83. <http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.7.3.4>
- Fuentes, A. (2015). "Narcotráfico y autodefensa comunitaria en "Tierra Caliente", Michoacán, México". *CienciaUAT*, 10(1), 58–70.
- Guerra, E. (2022). *Territorios violentos en México: El caso de Tierra Caliente, Michoacán*. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
- Guerra, E. (2017). "La violencia en Tierra Caliente, Michoacán, c. 1940–1980". *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, 53, 59–75. <https://moderna.historicas.unam.mx/index.php/ehm/article/view/65796/57770>
- J. L. (2015). *Tierra sin Dios: Crónica del desgobierno y la guerra en Michoacán* (Vol. 1). Grijalbo.
- Lemus, J. J. (2017). *Los malditos: Crónica negra desde Puente Grande*. Grijalbo.
- Maldonado, S. (2010). *Los márgenes del Estado mexicano: Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán*. El Colegio de México.
- Valenzuela, J. M., Nateras, A., & Reguillo, R. (Coords.). (2007). *Los Maras: Identidades juveniles al límite*. Imprenta Juan Pablo S.A.
- Vite, M. A. (2017). "Castigo y control: La vigilancia colectiva armada territorial en México, el caso de Tierra Caliente (Michoacán)". *Revista de Direito da Cidade*, 9(4), 1685–1712. <https://doi.org/10.12957/rdc.2017.30826>

Páginas Web

- Animal Político. (2013, julio 17). Presidente municipal michoacano está coludido con criminales, acusan purépechas. *Animal Político*. <https://www.animalpolitico.com/2013/07/presidente-municipal-michoacano-esta-coludido-con-criminales-acusan-purepechas/>
- Animal Político. (2014a, febrero 17). Detienen a 14 policías en Michoacán por presuntos nexos con el narco. *Animal Político*. <https://www.animalpolitico.com/2011/02/detienen-a-14-policias-en-michoacan-por-presuntos-nexos-con-el-narco/>
- Animal Político. (2014b, mayo 8). Matan a director de Seguridad Pública en Michoacán; investigan a policías municipales. *Animal Político*. <https://www.animalpolitico.com/2014/05/ejecutan-al-director-de-seguridad-publica-de-alvaro-obregon-investigacion-policias-municipales/>

- Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). (2024). *Informes económicos*. CEESP. <https://ceesp.org.mx>
- Changoonga. (2014, abril 6). Diputados, alcaldes y funcionarios michoacanos integraban red de negociadores con Templarios. *Changoonga*. <https://www.changoonga.com/diputados-alcaldes-y-funcionarios-michoacanos-integraban-red-de-negociadores-con-templarios/>
- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). (2023). *Mujeres y crimen organizado*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/ceav>
- Ferrer, M. (2015, mayo 18). Cártel Jalisco Nueva Generación: el nuevo imperio del narco. *Reporte Índigo*. <https://www.reporteindigo.com/reporte/cartel-jalisco-nueva-generacion-el-nuevo-imperio-del-narco/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). *Censo de Población y Vivienda 2020*. <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). *Estadísticas educativas*. INEGI. <https://www.inegi.org.mx>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). *Estadísticas de población y vivienda*. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2020/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)*. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/>
- Leco, C., & Aguirre, J. I. (2020). El fenómeno criminal en Michoacán: Una perspectiva desde la política local. *Academia.edu*. https://www.academia.edu/49517421/EL_FENOMENO_CRIMINAL_EN_MICHOACAN
- Proceso. (2009, diciembre 3). Coludidos con el narco, alcaldes y diputados locales de Michoacán: Coparmex. *Proceso*. <https://www.proceso.com.mx/114024/coludidos-con-el-narco-alcaldes-y-diputados-locales-de-michoacan-coparmex>
- Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). (2023). *Niñez en contexto de violencia*. REDIM. <https://redim.org.mx>
- Riva Palacio, R. (2014, enero 20). Michoacán, ejemplo de narco Estado. *El Financiero*. <http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/michoacan-ejemplo-de-narco-estado>
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2023). *Estadísticas de incidencia delictiva*. SESNSP. <https://www.gob.mx/sesnsp>
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2024). *Estadísticas de homicidio doloso por municipio*. SESNSP. <https://www.gob.mx/sesnsp>
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). (2025). *Datos de incidencia delictiva*. <https://www.gob.mx/sesnsp>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Global report on homicide 2023*. UNODC. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html>
- 24 Horas. (2018, marzo 14). Crimen organizado realiza bloqueos y quemas en Tierra Caliente de Michoacán. *24 Horas*. <http://www.24-horas.mx/2018/03/14/crimen-organizado-realiza-bloqueos-quemas-en-tierra-caliente-michoacan/>